

## ¿Regresa Sendero?

Eduardo Toche

Las recientes acciones realizadas por Sendero llevan a algunos a afirmar que se trata de manotazos de ahogado de esa organización subversiva. Pero, ¿no estaremos ante el agotamiento de un esquema de pacificación?

En los últimos meses el problema de la subversión volvió a ocupar el centro de la atención en los medios de comunicación. El motivo: las explosiones de dos coches-bomba en Lima durante las Fiestas Patrias, frente al cuartel de la 22a. Comandancia de la PNP el primero, y a la residencia de un general del Ejército Peruano -al mando del frente del Huallaga- el segundo.

Las reacciones subsiguientes denotaron preocupación ante lo inesperado de los atentados, que costaron el puesto al jefe de la DINCOTE, por supuesto «descuido» en sus funciones. Por otro lado, la opinión pública volvió a la carga preguntando si estábamos ante un «manotazo de ahogado» o un «rebrote» del terrorismo. Más aún, la esperanza de que la subversión ya hubiera sido acallada en 1995 acumuló una frustración más, generando confusión sobre los autores y sus intenciones: para unos fue Sendero, para otros no se debió descartar al MRTA e, incluso, hubo quienes especularon sobre la participación de narcotraficantes.

En suma, el ambiente generado no contribuyó precisamente a amenguar las pulsiones violentistas que aún aquejan al país. No hay duda de que además de la pérdida de vidas humanas y de la destrucción material que ocasionaron, en esa oportunidad los autores de los atentados se anotaron un éxito político al forzar el relevo de un alto jefe policial y captar la atención de los medios de comunicación por algunos días.

### Pacificación y cifras

Para abordar adecuadamente el tema no hay que dejar de relacionar esos hechos con el incuestionable éxito de la política de pacificación de los últimos años. Entre 1980 y 1991 se produjeron, en promedio, unos 1,890 atentados por año, es decir, 157 mensuales. Para los años 1992 y 1993 éstos cayeron a 1,480 anuales (123 mensuales), pero ya en 1994 fueron solo 684 y en 1995 sumaron 610 (57 y 51 mensuales respectivamente). Y en 1996, hasta junio se habían llevado a cabo 243 atentados, con un promedio mensual de 40.

Las cifras mencionadas no necesitan comentarios: la subversión ha sido reducida a la cuarta parte de la envergadura que mostraba durante los años 80.

Pero algo que llama la atención en ellas es la constante que revela la cifra anual de acciones terroristas desde 1994. Es decir, en lugar de describir una deseada curva descendente, el número de atentados parece haber alcanzado un punto de estabilidad. La pregunta es: ¿por qué?

Este indicador puede ser abordado desde diversos ángulos. Por ejemplo, un criterio estacional nos ofrece un trazo que empieza con un tramo ascendente entre enero-junio de 1994, para luego ingresar a un descenso continuo entre junio y diciembre de ese año. Entre enero y abril de 1995 vuelve a manifestarse un alza continua y de abril a agosto empieza el declive,

manteniéndose en un punto mínimo desde agosto de 1995 hasta febrero de 1996. A partir de marzo de 1996 estamos asistiendo

a una nueva arremetida. Resumiendo, los terroristas tienen capacidad para organizar una campaña anual, que dura aproximadamente 5 o 6 meses, a diferencia de los 80 cuando podían desplegar dos o tres campañas en el transcurso de un solo año.

Otra perspectiva sugerente es la espacial. Si hasta 1994 el escenario con mayor presencia terrorista fue Lima Metropolitana, en 1995 la región comprendida por el Alto Huallaga y otros lugares de la Selva, como la provincia de Satipo, fue la que registró la virulencia más alta. Ya en 1996 esta última tendencia ha sido clara, especialmente a partir del mes de mayo. En este sentido debemos también incorporar lo acontecido en otras zonas, como el Norte, específicamente las provincias de Sihuas (en Ancash), Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco (en La Libertad), en donde si bien la incidencia terrorista es baja no deja de ser constante.

Una tercera entrada es por el tipo de acciones realizadas por los subversivos. Al respecto se puede afirmar que los enfrentamientos armados se localizan fundamentalmente en el cordón cocalero del Huallaga y, en menor medida, en la sierra de La Libertad y Satipo. Lima Metropolitana y otras regiones, en el Sur, concretamente Cusco y Puno, manifiestan más bien una proclividad hacia las acciones de agitación y propaganda.

Esta especie de geografía de la violencia guarda una correspondencia exacta con las zonas de influencia bajo control de las dos facciones en pugna al interior de Sendero Luminoso. Allí donde hay preeminencia de las acciones armadas, como el Alto Huallaga, Satipo y las serranías de La Libertad, la presencia de las huestes de «Feliciano» es inobjetable. Incluso en la sierra liberteña una parte de sus operaciones está respondiendo a la liquidación de bolsones «gonzalistas» que propugnan el «acuerdo de paz».

Por otro lado, en lugares como Cusco y Puno, en los que no se ha registrado enfrentamientos armados durante los últimos años, resaltan las actividades de propaganda y agitación que llevan una clara marca de los seguidores del «acuerdo de paz». Incluso ya hay evidencias de ciertos intentos de cooptación de algunos gremios por parte de la facción gonzalista.

Los problemas del momento

Así, una simple correlación entre cantidad, frecuencia y lugar de la actividad subversiva en los últimos tres años configura un contorno preciso, que nos lleva a concluir que el terrorismo no está en una fase terminal ni muestra tampoco un repunte, como se ha pretendido últimamente.

Nos encontraríamos más bien ante un problema que presenta dos caras: una, el probable agotamiento de la política de pacificación, cuyos ejes matrices no parecen ser ya eficaces en las nuevas circunstancias; y, dos, como correlato de ello, Sendero Luminoso parece haber adquirido cierta articulación organizativa que sin tener posibilidad de alcanzar la potencialidad de años anteriores, puede aún imponer cierta presencia en la vida nacional.

A propósito, mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que la lucha de facciones que experimenta Sendero lo debilite al extremo de desaparecerlo. Sin embargo, esta es una posibilidad entre otras.

Puede también ocurrir, hipotéticamente, que en el plazo mediano no tengamos uno sino dos senderos, ambos poniendo énfasis en la lucha armada, aun cuando uno estime que ahora es el momento y el otro que hay que guardar fuerzas para la violencia de mañana.

A favor de esta última especulación está el hecho obvio de que ninguno de los dos tiene fuerza suficiente para desenvolverse en un frente que abarque todo el territorio nacional. Esto bien puede derivar en una «especialización regional» -para decirlo de algún modo- de estos grupos, tal como parece ya vislumbrarse.

En esta perspectiva no deben ser difíciles de entender las motivaciones y objetivos de «Feliciano», que no pueden ser otros que los del Sendero de los años 80. Pero no sucede lo mismo con «Gonzalo». Saber lo que éste quiere presupone saber lo que entendió por el «acuerdo de paz». No, por cierto, una rendición, sino el inicio de un período de «paz armada» que salvara a su organización de una desarticulación total, desde el momento en que su dirección nacional fue capturada.

El objetivo de Guzmán, claramente puntualizado en los famosos documentos que remite a sus militantes allá por 1994, fue poner a buen recaudo un «mínimo de partido», con la esperanza de hacerlo subsistir hasta que las condiciones volviesen a presentarse propicias para el desencadenamiento de una nueva oleada de violencia.

Las preocupaciones de «Gonzalo» en este sentido obligan, por otra parte, a interrogarse sobre los recursos humanos de que dispone para salvar la coyuntura crítica en que se halla inmerso. Según algunos estimados, que no establecen una necesaria distinción entre las dos corrientes senderistas, la organización terrorista (considerada como un todo) debe contar con una militancia que representa la octava parte de los efectivos que tuvo en sus momentos más corrosivos. Tales estimados se basan en el número de atentados que vienen ocurriendo en los últimos años.

Sin embargo, una lectura atenta puede permitirnos establecer, dado el desenvolvimiento reciente de los hechos, que la asociación directa entre cantidad de acciones violentas y militantes senderistas es, por lo menos, equívoca. Recordemos que los atentados disminuyen sensiblemente en 1994, es decir, el mismo año en que Abimael Guzmán ordena a sus seguidores acatar el consabido «acuerdo de paz». Remitirnos a la pacificación exitosa para explicar este hecho, es sólo una respuesta parcial. Restaría por saber si el Sendero «pro-Gonzalo», acatando una orden de su jefe, ha dejado de cometer atentados violentos, pero manteniendo una fuerza organizada y activa -aunque presumiblemente mermada- que privilegia el «trabajo político» en el tejido social, sin ponerse en evidencia.

Siguiendo este razonamiento, es lógico suponer que la opción militarista de «Feliciano» expone mucho más a sus militantes, dada la naturaleza de sus acciones. Así, es muy probable que los estimados que se hacen sobre los senderistas actualmente en actividad, se refieran en

realidad - sobre todo, aunque no necesariamente de manera exclusiva- a los que siguen esta línea.

Este es un aspecto importante del asunto porque tiene que ver no sólo con la capacidad del Estado para capturar a los sediciosos o hacer un efectivo seguimiento de los que fueron liberados, sino con la capacidad del senderismo para reclutar nuevos adherentes, especialmente -aunque no únicamente- los de la línea «gonzalista».

Lo dicho hasta aquí nos permite presumir la existencia de un senderismo en crisis de definición pero que no ha agotado sus potencialidades. En esta perspectiva, podemos imaginarnos un par de escenarios para el futuro inmediato, en el que el destino del terrorismo dependerá en gran medida de las formas en que se le combata.

Uno de ellos, el más pesimista, asumiría como premisa que no habrá grandes cambios en la estrategia contrasubversiva. De ser así, el actual estado de cosas, en el que se advierte la persistencia de ciertas dificultades para poner punto final al problema subversivo, tendería a agravarse.

En el otro escenario, buscar el modo de redimensionar la política de pacificación, proponiéndola como un asunto que atraviese las políticas sociales, económicas y culturales del país, de manera tal que permita superar la visión de una estrategia estrictamente militar, podría proporcionar los elementos necesarios para salir de los entrapamientos actuales.

El acento militar puesto a la pacificación fue necesario en su momento para reducir los efectos altamente perniciosos que mostraba la violencia política. Sin embargo, nadie puede suponer que la garantía frente a las posibilidades de conflictos sociales generalizados sea un permanente estado de sitio. Esto termina por desnaturalizar a las instituciones militares e inhibe el despliegue de una organicidad civil que actúe como contención y canalización de la violencia.